www.flacsoandes.edu.ec

repensar
AMÉRICA LATINA

3

América Latina y el Caribe: Escenarios posibles y políticas sociales

Editor: Theotonio Dos Santos

FLACSO

UNESCO
Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Oficina Regional de Ciencia
para América Latina y el Caribe

Representación de la
UNESCO ante el MERCOSUR

Proyecto Repensar América Latina

Coordinador General: Gonzalo Abad Ortíz

Comité Editorial:

Adrián Bonilla

Julio Carranza

Thetonio dos Santos

Francisco Rojas

Juan Valdés

Edición: Alfredo Prieto

Asistencia editorial: Laura Marrero

Volumen 3

Theotonio Dos Santos, Editor

América Latina y el Caribe: Escenarios posibles y políticas sociales

ISBN 978-92-9089-174-1

© UNESCO 2011

Los autores se hacen responsables por la elección y presentación de los hechos que figuran en la presente publicación y por las opiniones que aquí expresan, las cuales no reflejan necesariamente las de la UNESCO, y no comprometen a la Organización.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos, no implican de parte de la UNESCO juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites.

Esta publicación se encuentra disponible en www.unesco.org.uy/shs y puede ser reproducida haciendo referencia explícita a la fuente.

Impreso en 2011 por la Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y el Caribe
Luis Piera 1992, 2o. piso
11100 Montevideo, Uruguay

Índice

Preámbulo.
Julio Carranza Valdés 5

Presentación
Gonzalo Abad Ortíz 7

Introducción
Theotonio Dos Santos 13

La economía mundial y América Latina a inicios del siglo XXI
Orlando Caputo 19

Un repaso de la crisis y la necesidad de una nueva arquitectura financiera internacional
Oscar Ugarteche 57

La integración latinoamericana: etapas pasadas y escenarios posibles
Jaime E. Estay 93

Postneoliberalismo o cambio civilizatorio
Ana Esther Ceceña 121

Desigualdad y crisis de incorporación: la caja de herramientas de políticas sociales de la izquierda
Luis Reygadas y Fernando Filgueira 133

O espírito de Cochabamba: a reapropriação social da natureza
Carlos Walter Porto-Gonçalves 161

Prospectiva tecnológica para América Latina
Leonel Corona 181

La educación superior en el mundo y en América Latina y el Caribe: principales tendencias
Francisco López Segrera 207

Cambios demográficos y reestructuración económica en América Latina. Perspectivas y desafíos para las políticas sociales
Dídimo Castillo Fernández 233

Centroamérica 2010 y sus escenarios de integración
Jorge Rovira Mas 257

La crisis del imperialismo. América Latina y Panamá enfrentan cambios épicos en sus relaciones con los Estados Unidos
Marco A. Gandásegui, hijo 283

Sobre los Autores 313

Cambios demográficos y reestructuración económica en América Latina. Perspectivas y desafíos para las políticas sociales

Dídimo Castillo Fernández

Introducción

Durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va de la presente década, América Latina fue escenario de profundos cambios demográficos, económicos, sociales y políticos. En el ámbito demográfico, la región atravesó por una fase de plena y acelerada transición que se manifiesta en la disminución del ritmo de crecimiento de la población, resultado de la caída de la fecundidad y la mortalidad, así como el notable incremento de la esperanza de vida. El crecimiento poblacional ha dejado de ser la problemática central. En lo económico, tuvo lugar un intenso proceso de reestructuración orientado a la apertura económica y a la desregulación y flexibilización del trabajo. En los social y político se han dado cambios vinculados con los procesos de democratización, el fortalecimiento de las instituciones y una mayor participación ciudadana en las distintas esferas de la sociedad.

El cambio demográfico ha propiciado modificaciones en el perfil de demandas de la población. El descenso de la mortalidad, la caída de la fecundidad y los desplazamientos en la estructura por edad de la población, no solo tienen

efectos directos sobre el envejecimiento demográfico, el tamaño y composición de la familia y las relaciones de dependencia, sino también sobre la oferta de la mano de obra, los mercados laborales y la distribución de los ingresos. El descenso de la mortalidad y el rápido descenso de la fecundidad, aunado al aumento de la esperanza de vida, dio lugar al proceso de envejecimiento demográfico. La caída de la fecundidad, por un lado, determinó el incremento relativo de la población en edad activa, a pesar de la disminución del ritmo de crecimiento de la población y, por otro, impactó indirectamente sobre las posibilidades de participación e inserción de la mujer en el mercado de trabajo.

El agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y la adopción del de economía de libre mercado, marcaron un punto de inflexión en las formas de organización y gestión de la fuerza de trabajo. La liquidación del Estado benefactor determinó las privatizaciones y las posteriores reformas comerciales y laborales, con lo que se abrió un nuevo escenario de mediación política que impulsó la desregulación y la flexibilización de los mercados de trabajo ajustándolos a las nuevas circunstancias de competencias y acumulación de capital. La flexibilización implicó un cambio drástico en las formas clásicas de gestión y uso de la fuerza de trabajo con efectos directos sobre la estabilidad de las ocupaciones y niveles de ingresos de los trabajadores. Con ello se incrementó el desempleo y se expandió el trabajo informal y precario, este último diferenciado de las formas tradicionales a tiempo completo, con contrato definido, con empleado único y lugar fijo de trabajo.

En lo social, el modelo económico adoptado ha mostrado debilidad o escasa capacidad para enfrentar y resolver los viejos y nuevos problemas. La pobreza y la desigualdad social siguen representando dos de los mayores desafíos. A partir por lo menos de la década de los 90, la proporción de la población que vivía en situación de pobreza empezó a disminuir ligeramente, pero se mantiene casi invariable la desigualdad en los ingresos y la amplia brecha entre ricos y pobres. La evolución favorable de los últimos años ha sido muy dispar entre los países, los diferentes sectores sociales y los segmentos de la población.

El modelo económico imperante y las políticas sociales derivadas de este, han promovido una situación compleja de indefensión, pobreza y creciente vulnerabilidad social. A las limitaciones propias del modelo económico, particularmente en lo que refiere al desarrollo de políticas sociales idóneas para hacer frente a la situación de pobreza y desigualdad social, se suman los cambios

derivados de la dinámica demográfica, que al modificar el perfil de las demandas de servicios imponen nuevos desafíos a las políticas sociales.

El cambio demográfico

La segunda mitad del siglo xx fue un período de extraordinarios cambios demográficos. América Latina atravesó, primero, por un ciclo de intenso crecimiento poblacional y, posteriormente, entró en una etapa de desaceleración sistemática. Entre 1950 y 1975, la población en la región aumentó en más del doble al pasar de 167,3 millones de habitantes a 322,3, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2,7% en el período de 1950-1955 y 2,5% entre 1970-1975. En los siguientes decenios, como resultado de la inercia demográfica, la población mantuvo su crecimiento hasta alcanzar quinientos veintitrés millones en 2000, y 603 en 2010, con ritmos de crecimiento de 1,5 y 1,4% entre 2000-2005 y 2005 y 2010, respectivamente. Las proyecciones demográficas indican que la población de la región seguirá creciendo, pero a ritmos relativamente menores (CELADE, 2004).

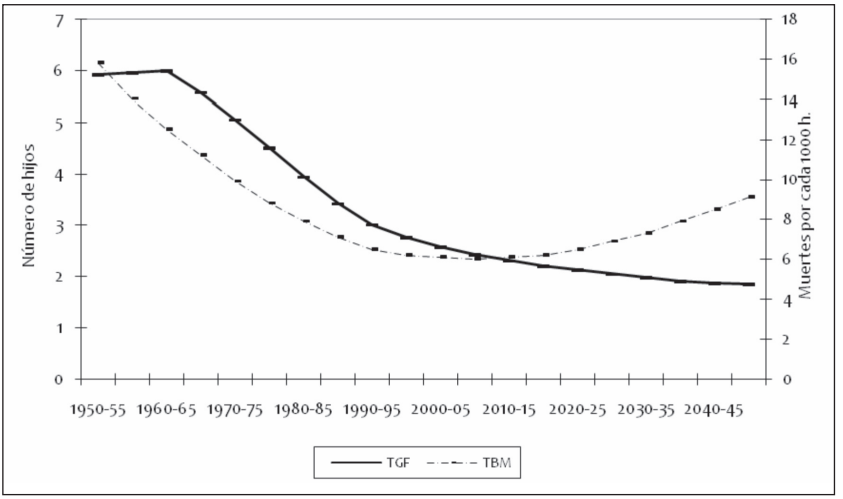
El avance en el proceso de disminución de la población se explica por los cambios en los niveles de la mortalidad y la fecundidad, conocidos con el proceso de *transición demográfica*.[76] Dicha concepción teórica hace referencia al paso de "un régimen demográfico en equilibrio, constituido por altos niveles de mortalidad y fecundidad, a una nueva fase de equilibrio con baja mortalidad y fecundidad" (Chackiel, 2000: 13). Entre 1950 y 2000, la tasa de mortalidad cayó de 15,8 a 6,2 fallecidos por cada mil habitantes, como resultado de los avances en materia de salud para el control y prevención de enfermedades trasmisibles y la expansión de los servicios médicos en todos los países de la región. En México, por ejemplo, la de mortalidad infantil disminuyó de 121 a 31 fallecidos por cada mil nacidos vivos entre 1950 y 2000. Algo similar sucedió en algunos países de Centro y Sur América, como Colombia y Chile, donde en el período este indicador pasó de 123 a 30 y de 120 a 12 fallecidos por cada mil nacimientos. El número de hijos por mujer, medido a través de la tasa global de fecundidad, disminuyó de 6 a 2,8 hijos por mujer. La caída fue rela-

76 Según Chackiel (2000), tanto en sus etapas iniciales de la transición demográfica como en las más avanzadas se experimenta una dinámica de escaso incremento de la población, pero en el estadio intermedio se registran elevadas tasas de crecimiento como efecto del desfase entre el comienzo del descenso de la mortalidad y la fecundidad.

tivamente rápida, y en el quinquenio 2005-2010 alcanzó 2,6 hijos por mujer, lo que inició un período de relativamente lenta disminución. Las estimaciones de CELADE (2004) hacen presumir que la región alcanzará una fecundidad de reemplazo alrededor del quinquenio 2020-2025 y logrará una tasa inferior a la de reemplazo entre 2030 y 2035. Algunos países como Argentina y Uruguay tuvieron un descenso temprano de sus tasas vitales durante la primera mitad del siglo pasado, ya que desde 1950 exhibían niveles cercanos a los 3 hijos por mujer (Gráfica 1).

Gráfica 1

América Latina: Tasa global de fecundidad y tasa bruta de mortalidad, 1950-2050



Fuente: CELADE (2004).

En contraste con otras zonas y países del mundo, en América Latina el proceso de transición demográfica se dio de manera mucho menos acelerada, con características propias y a diversos ritmos entre los países de la región y dentro de ellos. Cabe señalar que los desarrollados, particularmente los europeos, "ya presentaban una fecundidad de reemplazo en la década de los 70" (Chackiel, 2004:52). De acuerdo con la CEPAL (2009:208), en la región es posible identificar "cuatro grupos de países representativos de diferentes etapas de

la transición demográfica, donde persiste la heterogeneidad entre grupos y dentro de ellos".

En el primero, se ubican los más rezagados en la transición demográfica como Guatemala, Haití y Bolivia, que pese a haber bajado su fecundidad, continúan teniendo tasas elevadas en comparación con el promedio regional, de 2,3 hijos por mujer. Guatemala, por ejemplo, posee la tasa global de fecundidad más alta de la región —4,2 hijos—, seguido por Haití. En un segundo grupo están aquellos países que alcanzaron notables descensos de la fecundidad a principios de la década de los 80 como Ecuador, El salvador, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, y Honduras, Nicaragua y el Paraguay, que lo hicieron en los últimos años. Estos países presentan en la actualidad tasas de fecundidad similares, entre 3,3 y 2,3 hijos por mujer. En un tercer grupo se encuentran Argentina y Uruguay, que presentaron un descenso temprano de sus tasas de mortalidad y fecundidad durante la primera mitad del siglo pasado, y a partir de 1950 exhibían niveles de fecundidad cercanos a los tres hijos por mujer. Otros países de este grupo son Brasil y México, que aunque mantuvieron tasas globales de fecundidad de entre seis y siete hijos por mujer entre 1960 y 1970, avanzaron aceleradamente en la transición demográfica. El cuarto grupo está conformado por Costa Rica, Chile y Cuba, países más avanzados en la transición demográfica, con tasas de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo y esperanzas de vida superiores a los 78,5 años. Cuba, por ejemplo, alcanzó el nivel de reemplazo de la población muy temprano, entre fines de la década de los 70 y comienzos de los 80, actualmente con una tasa global de fecundidad de 1,5 hijos por mujer, inferior a la registrada en casi todos los países de la región.

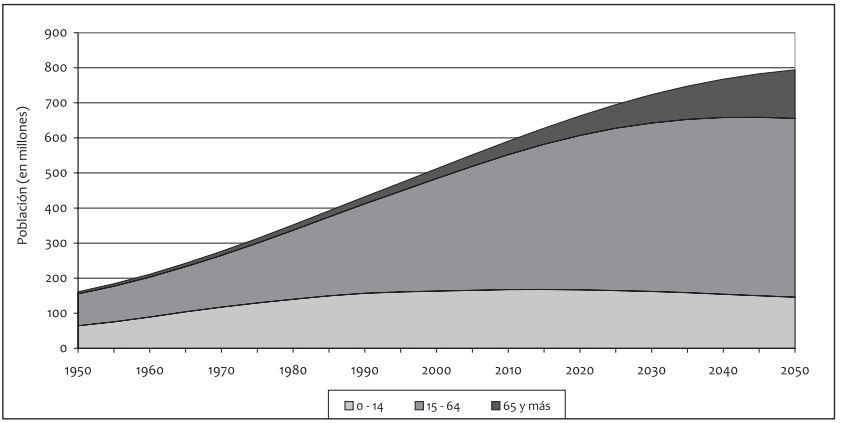
Los cambios en los componentes naturales del crecimiento demográfico (fecundidad y mortalidad) y sus consecuencias en la estructura de su población, determinaron escenarios novedosos en muchos sentidos. El impacto inicial de caída de la mortalidad —en circunstancias en las que se mantenía alta la fecundidad— determinó el crecimiento relativo de los grupos de menor edad. El segmento de la población de 0-14 años pasó de representar 40% de la población en 1950 a 43% en 1965, momento umbral del crecimiento poblacional, pero con el marcado descenso de la fecundidad a comienzos de la década de los 60, la cual experimentó una sistemática caída hasta representar solo 31,9% de la población en 2000. En contraste, durante los últimos cincuenta años, la población potencialmente activa de entre 15 y 64 años amplió de manera notoria la brecha al pasar de 51,8% a 70,6%, y la adulta mayor, con 65 años y más, creció ligeramente al pasar de 3,7% a 5,5%, entre 1950 y

2000. El incremento de la población en edad de trabajar tuvo en las últimas décadas un asenso muy superior a la población menor de 15 años, lo que dio lugar al llamado "bono demográfico", referido a la disposición de una amplia fuerza de trabajo, en circunstancias en las que es menor la población infantil y aún lento proceso de envejecimiento demográfico.

Como muestra la Gráfica 2, la población en edad de trabajar se duplicó entre 1970 y 2000, al pasar de 276,6 millones a 511,9, y casi se triplicará para 2050, al alcanzar 511,9 millones de personas potencialmente activas. Un factor que sin duda impactará en dicha tendencia es la migración intrarregional y extrarregional. Como se sabe, la zona tiene la tasa de emigración más alta del mundo; gran parte dirigida hacia los Estados Unidos, recientemente a España, Reino Unido, Países Bajos e Italia, entre otros. La conforman principalmente jóvenes y adultos en edades productivas con presencia creciente de mujeres, gran parte con bajos niveles de capacitación y capital humano (Castillo y Martínez, 2009a).

Gráfica 2

América Latina.
Evolución de la población por grupos de edad, 1950-2050



Fuente: CEPAL (2004).

Los cambios en la estructura por edad determinaron un inusitado aumento de la población adulta mayor. En términos demográficos, el envejecimiento tiene dos componentes: el que se refiere propiamente a la "vejez" de la persona en cuanto a la prolongación de la vida y el que alude a los cambios en la

distribución de las edades y conlleva el desplazamiento de las cohortes de la pirámide de edades. El envejecimiento es un proceso que se expresa en dos niveles: entre individuos y en el colectivo demográfico.[77] El individuo envejece a medida que incrementa avanza por las diversas etapas del ciclo de vida. El envejecimiento de la población implica el desplazamiento de las cohortes de edades y el incremento relativo de los subgrupos de mayor edad dentro de la estructura demográfica. La región latinoamericana experimenta en la actualidad un proceso generalizado de crecimiento sostenido de la población adulta. Los países que ahora se encuentran en una fase plena de su transición demográfica, como Costa Rica, Chile y Cuba, tendrán un mayor crecimiento de la población adulta mayor. Según estimaciones del CELADE, la proporción de población de 60 años y más, que representaba 8% en 2000, alcanzará 14,1% en 2025 y 22,6% en 2050.

Cabe señalar que el proceso de envejecimiento demográfico en la región se está dando en un contexto de inequidad social, desempleo y creciente desigualdad en los ingresos. Es, además, un fenómeno predominantemente femenino, determinado por la mayor sobrevivencia natural de la mujer, y se concentra en su mayoría en las áreas urbanas, lo que responde a las tendencias dominantes de urbanización, la dinámica demográfica y la mayor esperanza de vida al nacer de las personas en las ciudades. El retiro del Estado de sus funciones de garantizar seguridad social, atención a la salud y generación de empleos, deja particularmente a la población adulta mayor en una situación de desamparo y desconcierto. La reforma de los sistemas de pensiones en América Latina, según el propio Banco Mundial, promotor inicial, ha resultado ineficiente e "incompleta y ha fracasado en la extensión de la previsión social". En este marco, el estado ha relegado al mercado muchas de sus funciones de protección y seguridad social, el bienestar de una parte importante de los adultos mayores depende de los apoyos generados en los entornos familiares.

Al respecto hay que destacar que en los países de América Latina, la familia constituye un pilar esencial en la reproducción y bienestar de sus integrantes. En épocas de crisis y escasez de recursos, las familias despliegan diversas estrategias para obtener recursos adicionales, ya sea mediante la migración de

77 Es importante distinguir entre la vejez y el envejecimiento como dos caras de una moneda, la primera referida a un proceso gradual experimentado por los individuos, y la segunda al universo demográfico. Según Viveros (2001:12), "los individuos pasan por etapas de su ciclo de vida y alcanzan más años y la población envejece cuando las pirámides etarias adelgazan su base y ensanchan su cúspide".

uno o varios de sus miembros o con el uso más intensivo de la mano de obra disponible en los hogares. Sin embargo, la familia latinoamericana también ha sido fuertemente impactada por la transición demográfica, las transformaciones económicas y los cambios en los sistemas de valores. La dinámica demográfica, particularmente el descenso de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida y los cambios en los patrones de la migración, han afectado el tamaño, la composición de los hogares y las pautas generales de formación de uniones, pero también lo referente a las funciones, arreglos de convivencia y a las relaciones de poder entre sus integrantes. La configuración familiar actual tiene una composición mucho más diversa, más heterogénea, y tiende a ser una entidad mucho más abierta que en el pasado. En este sentido, es más vulnerable y sensible a las contingencias del entorno económico y social.

En México, por ejemplo, el tamaño promedio de los hogares aumentó de manera sistemática de 1940 a 1960. Sin embargo, al iniciarse el descenso de la fecundidad, la proporción de hogares pequeños —formados por cuatro miembros— se incrementó, y en particular la importancia relativa de los hogares grandes decreció gradualmente a partir de 1960. Entre 1960 y 1997, el tamaño promedio de los hogares disminuyó de 5,4 a 4,4 miembros. En el presente, se estima que en cada hogar viven 4,1 personas, y se prevé que debido a los cambios demográficos, el tamaño medio del hogar seguirá en descenso hasta ubicarse en 3,4 miembros en 2010, 2,9 miembros en 2020 y 2,6 en 2030 (CONAPO, 2000).

Las recientes transformaciones demográficas están dando lugar a nuevas formas de familia. Se habla de un cambio en modelo de familia extensa al de nucleares, diversas en composición y arreglos de convivencia. La nuclear constituye el modelo predominante, pero adquiere nuevas modalidades, entre las que figuran las familias reconstruidas, el incremento de hogares dirigidos por mujeres, las parejas sin hijos y los hogares unipersonales, no familiares. Es además creciente el fenómeno de familias mixtas, con descendencias de algunos de los cónyuges o ambos fuera de la unión y el matrimonio, lo cual complejiza las relaciones familiares entre parejas y los descendientes. Se habla incluso de una "segunda transición demográfica" en relación con las transformaciones en los sistemas de valores y actitudes, así como en el comportamiento individual, básicamente en cuanto a la formación y estabilidad familiar, que entre algunas de sus primeras manifestaciones plantean el reemplazo del matrimonio por las uniones libres o consensuales, las uniones conyugales sin hijos y la paternidad y maternidad fuera de uniones estables.

Quizás uno de los cambios más notables que afecta las funciones tradicionales de la familia está asociado con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Las nuevas condiciones laborales y la creciente participación de la mujer han provocado modificaciones inéditas en la organización familiar. La división social del trabajo doméstico y extradoméstico, y con ello el papel tradicional de las parejas, se ha trastocado. En cierto modo el varón ha dejado de ser el proveedor único o principal, y aunque la mujer sigue llevando el mayor peso de las actividades domésticas, el escenario familiar es cada vez más de obligaciones y responsabilidades compartidas. Ciertamente, resulta controvertible hablar de una crisis de la institución familiar, pero lo real es que ha cambiado de modo sensible. Y aunque las funciones de la familia no han sido desplazadas, sino más bien modificadas, esta ya no ofrece las funciones de asistencia que aseguraba en el pasado, pero subsiste como la instancia básica de cooperación y apoyo entre sus miembros.

Los cambios demográficos y económicos están determinando nuevas demandas sociales por parte de la población y las familias. En particular, el demográfico impactó directamente sobre la población en edad laboral. Sin embargo, el crecimiento de la oferta de trabajo no solo depende de las transformaciones demográficas, sino también de las económicas, sociales y culturales que inciden sobre la población potencialmente activa y las familias, y determinan la participación ampliada de sus miembros en la actividad económica. En sentido amplio, la fuerza de trabajo está determinada, cuantitativamente, por la dinámica demográfica, en particular por los cambios en la estructura por edad, el crecimiento y la concentración de la población en edad de trabajar y, cualitativamente, en función de sus características de capital humano, sobre todo en cuanto a los niveles formativos o educacionales. La fuerza de trabajo, en términos demográficos, al estar determinada por la estructura de edad y sexo de la población, depende del crecimiento natural de la población y de la dinámica de las migraciones, internas e internacionales (Farooq y Ofosu, 1993).

En América Latina, en términos generales, tanto la población de 0 a 14 años como la de 15 a 59, correspondiente a la en potencia activa, mostraron tasas de crecimiento decrecientes, por lo menos desde mediados de la década de los 80. La convergencia de ambos factores determinó el rápido ascenso de la fuerza de trabajo, sobre todo en las décadas de los 70 y 80. Con el acelerado crecimiento de la población durante los decenios anteriores, la población en edad laboral creció a ritmos apreciables. De una tasa de 2,5% entre 1960 y 1970, descendió a 2,4% durante los 80 y a 2,1% entre 1990 y 2000 (Waller,

1998). Sin embargo, el incremento de la población en edad de trabajar no se correspondió con la evolución de la tasa de participación, la cual pasó de 50,4% en 1950 a 44,9% en 1970 y volvió a ascender a 51,4% en 1990. Ello se explica en gran medida por el proceso de la urbanización y, en dicho contexto, por la consecuente pérdida de importancia del trabajo agrícola y el impacto de la ampliación de los sistemas educativos, que incidieron en la caída de la participación económica, sobre todo masculina: pasó de 81,3 a 70,4% entre 1950 y 1970.

La participación económica femenina tampoco mostró cambios importantes en esos años, manteniendo tasas de 19,4% y 19,6%, respectivamente. No fue sino hasta las siguientes décadas cuando presentó un ligero aumento de 27,9% en 1980 y 32,1% en 1990 (Weller, 1998). La conjunción de estas dos variables explica la evolución temporal y diferencial por género de la fuerza de trabajo en la región durante la segunda mitad del siglo pasado. La población económicamente activa (PEA) global creció a ritmos de 1,9% entre 1950 y 1960, lo hizo a tasas de 2,3% entre 1960 y 1970 y logró el nivel más alto en el período 1970-1980, cuando presentó una tasa de 3,8%, derivado de la inercia demográfica de los períodos previos, para luego descender a 2,9% entre 1980 y 1990. En el mismo sentido, a lo largo de dichas décadas la fuerza de trabajo femenina creció a tasas relativamente superiores a la masculina. Así, mientras la PEA masculina creció a una tasa anual de 1,9% entre 1950 y 1960, se incrementó en 2,9% durante la década de los 70, y creció a 2,4% entre 1980 y 1990. La PEA femenina cambió a tasas de 2,0%, 6,5 y 3,9%, respectivamente, y pasó a representar el componente más importante del crecimiento de la fuerza de trabajo en la región.

Según datos de CELADE, por lo menos hasta 2025 el impacto del crecimiento demográfico acelerado experimentado en la región hasta la década de los 70 seguirá contribuyendo al de la PEA, dado el desplazamiento creciente de las cohortes de 15 años y más, o sea población en edad de trabajar (PET), con crecimiento a ritmos superiores que el de la total (Bajraj *et al.,* 2002). En tal sentido, los jóvenes y adultos jóvenes representan los mayores retos y desafíos, en particular en cuanto a la demanda de empleo, a pesar de los importantes logros en las posibilidades de acceso a la educación formal y otros conquistados. Los cambios en la estructura por edades de la población que, dan lugar a la reducción de los grupos de menor edad e incremento de los adultos mayores, así como a las modificaciones en la estructura y composición de las unidades familias, tienen un impacto directo en la carga de dependencia infantil y adulta de la población en edad de trabajar. La tasa de dependencia

infantil, referida a la población de 0 a 14 años en relación con la ubicada entre 15 y 64 años, presentó una disminución de 20% entre 1970 y 2000, al pasar de 71% en 1950 a 50,9% en 2000; mientras que la tasa de dependencia senil o adulta, que se refiere al cociente de la población de 65 años y más entre la población de 15 a 64 años, aumentó de 6,5% a 8,7% en dicho período, y en 2010 fue de 9,9%. Las cargas de dependencias —diferentes, según se concentren en mayor o menor grado en la infancia o en las personas mayores—, ejercen presiones diferentes sobre la capacidad de las familias y demandan de atención y provisión de soluciones por parte de las instancias promotoras de las políticas sociales.

Reestructuración económica, empleo, desigualdad y pobreza

Durante las últimas décadas, América Latina ha atravesado por una etapa de profundas y rápidas transformaciones económicas y sociales. La década de los 80, proclamada como la "década perdida", aparentemente sin mayor trascendencia, podría caracterizarse como un período de crisis con cambios radicales en los ámbitos económicos. Con ella, finalizó el modelo de desarrollo "hacia dentro", dominante hasta entonces, y se impulsó un nuevo patrón de economía abierta de acumulación globalizada, en un inicio puesto en práctica en los Estados Unidos y Gran Bretaña a principios del decenio de los 80. Cabe señalar que la región enfrentó ambos momentos con cierto desfase respecto a la evolución de la economía mundial (Castillo, 2009b). No fue mayoritariamente impactada por la crisis capitalista de 1970, dado que pudo solventar y mitigar sus efectos al recurrir al endeudamiento externo (Ehrke, 1991), incluso rebasando su capacidad crediticia en el mercado financiero internacional.

La crisis económica regional se postergó, y con ello la región también retardó su participación en la economía internacional y en la adopción de los avances tecnológicos que se venían gestando en los países industrializados. Quedó, en cierto modo, momentáneamente marginada de los núcleos dinámicos de la economía mundial. No obstante, América Latina no ha estado al margen de los demás cambios, e inclusive fue indirectamente afectada por la creciente innovación tecnológica. Según Flor Brown (1994:1), "una de las razones del fracaso [del modelo de sustitución de importaciones] fue precisamente la revolución tecnológica internacional", en el sentido de que "pocas industrias protegidas podían seguir el paso de los cada vez más rápidos avances tecno-

lógicos internacionales". El capital, bajo esta nueva lógica, alentó la flexibilización y la desregulación contractual del trabajo, promovió el desempleo y la inestabilidad laboral y la precarización del trabajo. El nuevo modelo económico incentivó la libre competencia de los mercados, al hacer uso intensivo de mano de obra barata, con lo que privilegió la eficacia económica sobre la solidaridad social.

La dinámica económica, el mercado de trabajo y la calidad del empleo

En América Latina, el desempleo es considerado una de las debilidades del modelo económico vigente, no subsanado con las reformas estructurales ni con el crecimiento económico en los momentos de auges relativos. El proceso de reestructuración económica no tuvo un efecto importante en la generación de empleos, ya que por un lado privilegió el uso "intensivo de mano de obra especializada" (CEPAL, 2001:21) y, por el otro, el crecimiento económico cuando fue posible, por lo general resultó exiguo y poco duradero, y no tuvo gran influencia en la creación de empleos en la cantidad y calidad demandada. Los cambios generados por el modelo neoliberal han ido en muchos sentidos, dando lugar a una estructura laboral muy diferente a la del modelo de sustitución de importaciones, iniciada en 1950 hasta casi finales de la década de los 70. El modelo vigente, por el contrario, se caracterizó por la implementación de medidas de desregulación y flexibilización contractual orientadas a reducir los costos salariales, lo que fomentó el desempleo y subempleo, así como el trabajo informal y precario. Casi sin excepción, todos los países de la región, entre ellos, Argentina, Colombia, Perú, Guatemala, Panamá y Venezuela, realizaron reformas profundas a la legislación laboral o adoptaron, de hecho, estrategias de flexibilización laboral, tendientes a modificar las maneras de contratación, enfocadas sobre todo en reemplazar el trabajo de tiempo indefinido por el empleo de duración determinada, menos costoso y más acorde con los requerimientos de la movilidad de mano de obra demandada por las grandes empresas.

La reestructuración económica, contrariamente a lo planteado por sus promotores, acentuó las tendencias de segmentación del mercado de trabajo, al promoverse los diferenciales de ingresos entre sectores y la especialización de las ocupaciones. La década de los 80 marcó así un cambio profundo e integral, acentuado en años recientes. Particularmente durante el decenio de

1990-1999, la política de ajuste adoptada tuvo consecuencias directas sobre el mercado de trabajo, por lo menos en dos sentidos: el incremento del desempleo y el fomento de la desregulación laboral y el deterioro de la calidad de las ocupaciones, las cuales han ido desplazándose desde los sectores productores de bienes hacia los generadores de servicios, en sentido amplio. Las nuevas disposiciones fueron mejor acogidas por las grandes empresas, las cuales pasaron a sustituir contratos indefinidos por otras modalidades de incorporación al trabajo más flexibles y menos costosas. En términos generales, ha habido un deslizamiento del empleo asalariado industrial hacia actividades terciarias, con considerable incremento del trabajo independiente o por cuenta propia.

A pesar de las reformas estructurales, las economías de América Latina no han crecido de manera sostenida, sino por períodos relativamente cortos, interrumpidos por diferentes crisis.[78] Las causas pueden ser diversas. Cimoli *et al.,* (2006:103) sostienen que la "heterogeneidad estructural ha sido una barrera de larga data para el crecimiento en América Latina". Argumenta que "la convergencia de las economías latinoamericanas hacia aquellas que se encuentran en la frontera tecnológica se ha visto de modo persistente dificultada por la coexistencia en la región de un sector formal y otro informal que poseen sistemas productivos e institucionales diferentes". Entre 1950 y finales de la década de los 70, la región creció a un ritmo de 5,5%, superior al crecimiento de la economía mundial, período en el que los Estados Unidos y otros países de Europa occidental lo hicieron a una tasa inferior de 3,9%. En contraste, durante la crisis, entre 1981 y 1990, el producto interno bruto (PIB) de la región creció a 1,2% anual (CEPAL, 2001). Entre 1991 y 2000 tuvo un ligero incremento al situarse en 3,3%. La década de los 2000 mostró un importante desempeño económico que tuvo impactos positivos sobre la creación de empleos y las condiciones de vida de la población, pero fue revertida por los efectos de la actual crisis económica global. En 2004 experimentó el crecimiento más alto de la década, alcanzó 6,1% y mostrar un importante desempeño hasta 2008, año de inicio de la crisis estadounidense. La consecuencia fue una drástica caída de -1,9% del PIB regional (Gráfica 3).

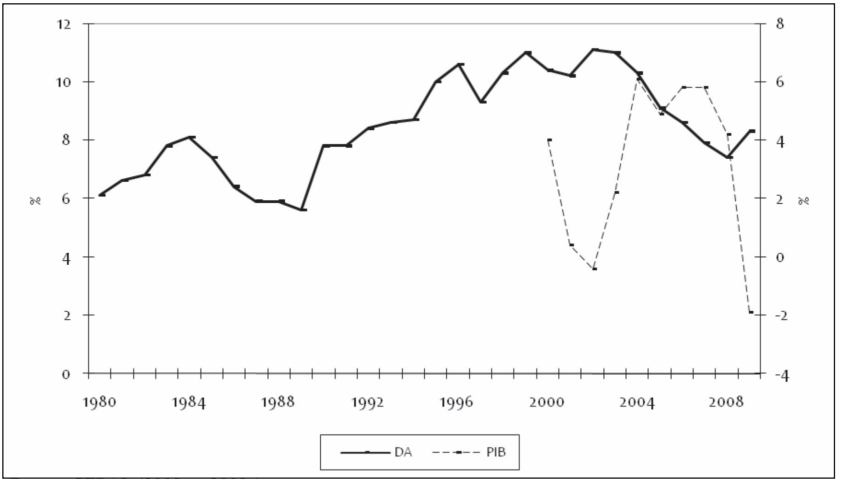
Ciertamente, el crecimiento económico registrado durante las últimas tres décadas ha tenido efectos limitados sobre la creación de empleo. Si bien América Latina alcanzó niveles moderados de crecimiento económico durante la década de los 90 y, particularmente, durante la segunda mitad del decenio de 2000-2009, no pudo revertir la tendencia estructural ascendente de in-

78 En 1995 se vieron afectadas por la crisis mexicana, en 1999 por la asiática y a finales de 2008 por la crisis financiera de los Estados Unidos.

cremento del desempleo abierto y subutilización de la fuerza de trabajo. El desempeño restringido del mercado de trabajo, además de estar condicionado por el ritmo relativamente alto de la oferta de trabajo derivada del aumento de la población en edad de trabajar, congruente con el rápido crecimiento demográfico de la década de los 60 y comienzos de los 70, sufrió el impacto de la creciente participación económica de las mujeres. En cierto modo, la reestructuración económica no incentivó la creación de empleos; por el contrario, el desempleo, la informalización y la precarización del trabajo han sido crecientes. En la década de los 90, "la tasa de crecimiento del empleo fue inferior a la de la segunda mitad de los años 80" (Stallings y Weller, 2001:194).

A la falta de dinamismo del mercado de trabajo contribuyó el repliegue del Estado como generador directo de puestos de trabajo y la consiguiente reestructuración de los sistemas productivos. El desempleo abierto, que alcanzó en 1984 su nivel más alto, con una tasa de 8,4%, descendió a 5,6% en 1989, se incrementó casi de manera sistemática en los próximos años hasta alcanzar 11,1% en 1999, conservó niveles elevados hasta 2003, y descendió a partir de entonces hasta 2008, año en que se inició la crisis económica, a una tasa de 7,4%, con niveles promedios notablemente superiores a los experimentados en la década de los 80 (CEPAL, 2009c).

Gráfica 3
América Latina.
Evolución del desempleo abierto y el PIB, 1980-2009



Fuente: CEPAL (2009a y 2009c).

La crisis global de 2008, aunque con intensidad variable en los países de América Latina, aumentó el desempleo, la informalidad y precariedad laboral. Según datos de la OIT, dicha crisis "lanzó al desempleo a dos millones de trabajadores durante 2009", con lo que elevó a dieciocho millones el número de desempleados en la región. Los países más afectados fueron Chile, Colombia, Jamaica y Perú, y en menor medida Costa Rica, México y Trinidad y Tobago. En cierto modo, el desempleo y la creciente precarización del trabajo resultan de las formas de inserción y articulación de las economías de la región al mercado mundial y, en ese sentido, expresan el nivel de contradicción de las transformaciones productivas a escala nacional. El problema no es solo de desempleo abierto, sino también las modificaciones en la estructura de ocupación y subutilización del trabajo, que con nuevas lógicas y con renovados soportes técnicos ha cambiado el perfil del obrero y de todos los asalariados. La precarización del trabajo está así conectada con los mecanismos de maximización de las ganancias de los sectores capitalistas y con las estrategias de explotación ampliada del trabajo dirigidas a obtener mayores beneficios.

Las transformaciones en la estructura ocupacional son cada vez más marcadas, y se destacan, por un lado, la creciente tercerización y feminización de las ocupaciones y, por otro, la precarización del trabajo en cuanto a calidad del empleo y el deterioro de los ingresos. Según Stallings y Weller (2001:196), las reformas económicas impulsadas durante las últimas dos décadas "cumplieron una función importante en el crecimiento del empleo en el sector servicios, así como en la polarización que en él se produjo". La pérdida de relevancia de las actividades primarias y secundarias en la generación de empleos es notoria. La expansión del sector terciario domina el mercado de trabajo. El empleo en el sector servicios, además de absorber tres cuartos de la fuerza de trabajo, continúa expandiéndose a expensas de las actividades productoras de bienes, por lo general generadoras de trabajo asalariado más estable y mejor remunerado.

Pobreza y desigualdad social

En América Latina, la población en condiciones de pobreza disminuyó ligeramente en los últimos años debido, en parte, a un incremento en los niveles de ingreso medio de la población (CEPAL, 2009b), pero particularmente a las políticas de combate a la pobreza emprendidas por los gobiernos, en gran medida conformadas por programas dirigidos a subsidiar los requerimientos

básicos de los grupos más desfavorecidos. La pobreza no ha dejado de representar el gran desafío de la política social. La evolución favorable observada en el período 2003-2008, conocido como el "quinquenio dorado", en el que la región experimentó un lapso de estabilidad y relativo crecimiento económico, fue muy desigual entre los países, y dentro de estos, con marcadas diferencias entre los segmentos de la población de acuerdo con las condiciones de género, grupos etáreos, lugar de residencia, nivel educativo y condición étnica de las personas.

La población adulta mayor representa un grupo vulnerable, con alta incidencia de pobreza. El bienestar de este grupo poblacional depende de sus niveles de educación, así como del cuidado y apoyo familiar, y de los posibles ahorros al momento de retirarse de la actividad laboral. En particular, en el caso de las mujeres muchas enfrentan la vejez en condiciones de viudez, además de resultar mayormente afectadas por el trato desigual en los mercados de trabajo. La cobertura de los sistemas de jubilación y pensiones en nuestros países es relativamente baja, y cuando se dispone de ellos, no suelen cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios. Los procesos de flexibilización e informalización laboral son factores que operan en detrimento de las posibilidades de acceso a dichos sistemas de seguridad social, sobre todo por parte de los adultos mayores pobres.

La pobreza depende de muchos factores económicos, demográficos, culturales, sociales y políticos. El crecimiento económico es un elemento necesario, pero insuficiente para abatir la pobreza. En este marco, la cuestión de la política social es compleja. La falta de comprensión de que la pobreza es multidimensional ha determinado la deficiente coordinación entre las instituciones que operan en lo social, y explica los insuficientes avances a pesar del importante aumento experimentando en los gastos públicos en servicios sociales básicos de algunos países. No solo la política social incide sobre el bienestar de población. Todas las otras políticas públicas que normalmente no son definidas como sociales, pueden tener una repercusión igual o superior en el bienestar social de la población. La política pública debe entenderse como una totalidad en la que las políticas sociales se interrelacionan con el resto de las otras. En otro ámbito, diversas políticas sociales, como la educación, pueden tener un efecto directo sobre las economías locales y nacionales. La pobreza no solo refiere a una condición económica circunscrita a la insufi-

ciencia de ingresos experimentada por las familias y los individuos. Tiene un componente ético que afecta diversos ámbitos de la persona.

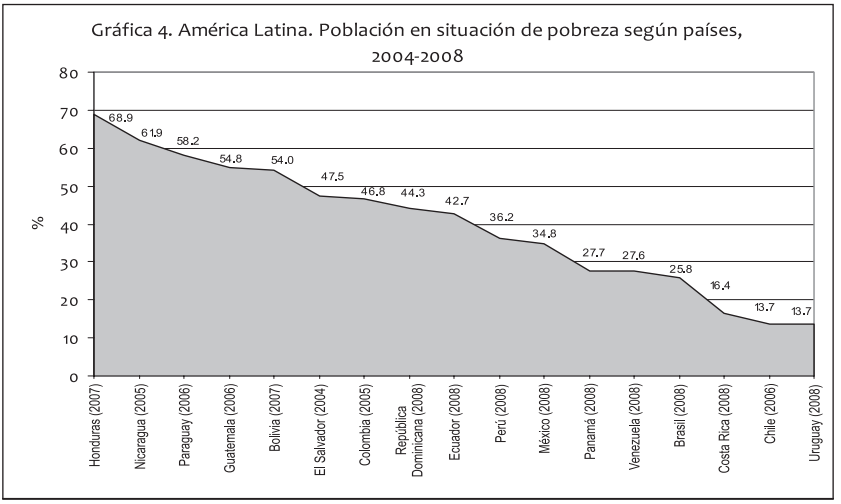
La desigualdad en la distribución de los ingresos se acentuó durante las últimas décadas. La región alcanzó niveles moderados de crecimiento económico durante la década de los 90, pero no pudo contener la tendencia ascendente al incremento del desempleo abierto y la subutilización de la fuerza de trabajo. El desempeño restringido del mercado de trabajo, además de estar condicionado por el ritmo relativamente alto de crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo —derivada del aumento de la población en edad laboral— y el impacto de la creciente participación económica de femenina, opera condicionado por las estrategias empresariales orientadas a la maximización de las tasas de ganancia, en entornos de creciente competencia de económica internacional.

Hasta por lo menos finales de la década de los 90, la proporción de la población que vivía en situación de pobreza empezó a disminuir ligeramente, pero se ha incrementado de manera significativa la desigualdad en los ingresos y se ha ensanchado la brecha entre ricos y pobres. Según la CEPAL (2009b) en América Latina este indicador ascendió de 40,4% en 1980 a 48,3% en 1990, pero descendió apreciablemente entre 2002 y 2008 —período de relativa estabilidad económica en la región— al pasar de 44 a 33%.[79] En esta última etapa, la pobreza urbana cayó de 38,4% a 27,6%, y la rural —con mayores rezagos— de 61,8% a 52,2%. La extrema pobreza o indigencia disminuyó de 19,4% en 2002 a 12,9% en 2008, congruentemente con el énfasis mostrado en las políticas sociales impulsadas por los gobiernos durante los últimos años. El proceso de reducción de la indigencia ha beneficiado más a las zonas urbanas. La evolución favorable en este lapso ha sido muy dispar entre los países y los diferentes sectores de la población. Los más afectados son Honduras, Nicaragua, Paraguay Guatemala y Bolivia, con más de 50% de la población en situación de pobreza (CEPAL, 2009b) (Gráfica 4).

79 Según la CEPAL (2009b:55) "el único país donde se registró un empeoramiento de la situación de a pobreza fue México".

Gráfica 4

América Latina.
Población en situación de pobreza según países, 2004-2008



Fuente: CEPAL (2009b).

Otro rasgo sobresaliente es la alta y persistente desigualdad social. América Latina es la "región más desigual del mundo". En ella, el crecimiento medio anual del ingreso per cápita cayó de 3,1% en el período que media entre la Segunda Guerra Mundial e inicios de la década de los 80 a 0,5% entre finales de la de los 90 y 2004 (Castillo, 2009b). La desigualdad social es creciente, como en casi todos los países pobres y ricos que adoptaron el modelo neoliberal como opción económica, social y política de desarrollo. Según la CEPAL (2006), la desigualdad en la distribución del ingreso en la región "no solamente excede a la de otras regiones del mundo, sino que, además, se mantuvo invariable durante los 90 e incluso empeoró a comienzos de la presente década". Los países con nivel de desigualdad más alto, medido sobre la base del coeficiente de Gini, en el que "0" es total paridad y "1" lo contrario, son Brasil (0,594), Guatemala (0,585), Colombia (0,584) y Honduras (0,580), y con menores distribución del ingreso se encuentran Venezuela (0,412), Uruguay (0,445) y Costa Rica (0,473). En términos generales, todos los países del área mostraron relativos avances en este aspecto, inclusive en el entorno de la crisis, entre 2007 y 2008, con una excepción: "México fue el único país que presentó una clara tendencia al deterioro distributivo" (CEPAL, 2009b: 59).

La actual crisis económica limitará los logros alcanzados en la disminución de la pobreza y la desigualdad social, al impactar directamente sobre el empleo y los ingresos de los ocupados, e indirectamente sobre la capacidad financiera de los gobiernos para llevar a cabo los planes y programas de combate a la pobreza, conforme a las estrategias propia y a los acuerdos internacionales.

Consideraciones finales. Perspectivas, retos y desafíos de las políticas sociales

En América Latina, la transición demográfica y los consecuentes cambios en la estructura de edad de la población introdujeron modificaciones inéditas en el perfil de demandas de servicios de los grupos social y demográficamente más vulnerables. El escenario descrito plantea en el corto y mediano plazo problemas de orden estratégico en los ámbitos de las políticas sociales. La dinámica poblacional actual es, en principio, altamente favorable, ya que la población dependiente constituye una parte decreciente de la total. El problema no deriva del crecimiento de la población, sino del surgimiento de "nuevos" segmentos de esta, privados de los recursos para solventar sus necesidades básicas. En el entorno actual, de achicamiento del Estado, privatización y desregulación de los servicios públicos, son, además, mayores los riesgos de desprotección social por parte de la población y las familias. En ese sentido, se imponen nuevos retos en la concepción y aplicación de las políticas de sociales.

El retiro del Estado de las actividades productivas —y particularmente de las funciones anteriormente sustantivas de protección social— ha promovido una mayor indefensión, vulnerabilidad, exclusión e inseguridad sociales. En particular, la situación de "vulnerabilidad natural" de la población adulta mayor, hasta cierto punto inherente a las condiciones cronológicas, se ve afectada por los déficit de cobertura y calidad de atención de los sistemas de seguridad prevalecientes. La nueva actuación del Estado no significa que haya dejado de intervenir en los aspectos fundamentales de la sociedad, sino que reorienta sus acciones y sus apoyos a favor del "mercado". En dicho escenario económico, el envejecimiento demográfico supone también un *envejecimiento social* que guarda relación con los cambios en los mercados de trabajo y los supuestos que sustentan la idea de competitividad laboral, y el hecho de privilegiar a la fuerza de trabajo joven, lo que complica la situación de los adultos mayores, cuando no disponen de jubilación u otras fuentes de ingresos alternas.

Los cambios operan e inciden en todos los órdenes. El impacto del descenso de la fecundidad sobre el tamaño de la familia tiene consecuencias colaterales y adicionales, en especial en lo que toca a los posibles arreglos y estrategias de apoyo generados en los contextos domésticos. En el mismo sentido, las circunstancias que dan lugar al llamado "bono demográfico", plantean una oportunidad casi perdida. La reciente evolución de las economías regionales ha mostrado una aguda debilidad en la generación de empleos, determinada por las nuevas formas de organización del trabajo y la adopción de tecnologías que limitan la creación de puestos de trabajo y promueven el deterioro de las ocupaciones entre los trabajadores menos calificados. Los problemas de pobreza y bienestar de la población están así íntimamente vinculados con las posibilidades de impulsar políticas de desarrollo regionales eficaces y oportunas. La coexistencia de zonas con altos niveles de desarrollo relativo y otras atrasadas, marginalizadas, constata la situación secular de heterogeneidad estructural y las limitaciones de los modelos económicos y políticos adoptados para enfrentarlas.

El crecimiento económico es un elemento necesario, pero insuficiente para el abatimiento de la pobreza.[80] En este marco, la cuestión de la política social es compleja. La falta de comprensión de que la pobreza es multidimensional ha determinado la deficiente coordinación entre las instituciones que operan en lo social, y explica los insuficientes avances a pesar del relativo aumento experimentando en los gastos públicos en servicios sociales básicos de algunos países. En lo tocante a la reducción de la pobreza es fundamental promover programas orientados a disminuir las brechas entre regiones y la universalización de la cobertura de los servicios básicos entre los grupos más vulnerables. Cabe enfatizar que las posibilidades de éxito de las políticas sociales no dependen solo de los entornos demográficos, sino de la interrelación con otras instancias económicas, sociales y políticas que pueden favorecer o limitar los alcances de las políticas sociales.

En las circunstancias actuales, un objetivo prioritario de las políticas sociales implicaría enfocarse en la integración productiva de la población activa, antes que la adulta mayor crezca, y aprovechar la "ventana" abierta por el "bono demográfico". No obstante, en cierto modo, el reto es doble: implica absorber

80 A mediados del siglo pasado se preveían como situaciones transitorias en inevitable proceso de extinción. En las concepciones modernizantes y desarrollistas de la época se postulaba la idea de que el crecimiento económico subsanaría por sí solo los problemas y distorsiones generados por el subdesarrollo.

los rezagos acumulados e incorporar a la nueva población trabajadora. Los desafíos, además, no solo corresponden a la cantidad de empleos demandados, sino también a su calidad. El capital humano ha pasado a ser uno de los elementos importantes en la determinación de la calidad de los empleos y en los niveles de ingresos laborales. La educación es quizás la variable con mayor influencia sobre la pobreza familiar y el bienestar de las personas. La educación tiene un efecto múltiple sobre diversos ámbitos de la vida, y en especial sobre las posibilidades de poder acceder al mercado de trabajo en circunstancias menos desfavorables. Los escasos niveles de educación suelen corresponder con la inserción en actividades de mala calidad, en ocupaciones laboral y socialmente desprotegidas, generalmente con ingresos bajos. Los niveles de estudios desempeñan un papel básico, aunque no definitivo, sobre las condiciones de participación en el mercado de trabajo.

En este contexto, a pesar de las ventajas que podrían derivarse de los cambios demográficos, las posibilidades de mejoramiento social y moral resultan limitadas. La supuesta solución derivada del mercado es ficticia. El descenso de la fecundidad generó significativos impactos sobre el tamaño de la familia y, por consiguiente, en el debilitamiento de las redes de solidaridad, en sociedades donde los apoyos familiares operan como importantes estrategias de vida. El cambio estructural de la institución "familiar" ha dado lugar a un vacío que el Estado no está cubriendo. En las circunstancias económicas vigentes, esta deuda social es casi irresoluble debido al incremento de la población en edades activas y a las limitaciones intrínsecas del modelo económico para la creación de empleos suficientes y de calidad necesaria. Se podría decir que estamos ante una triple "falla" de las fuentes del bienestar social: *la familia, el Estado y el mercado*. La situación es aún más compleja a luz de las prospectivas de mediano y largo plazo. El cambio que se anticipa para los próximos tres decenios plantea serios retos. El mayor problema es que sin haberse resuelto los problemas acumulados de índole básica para el bienestar de la población, se enfrentan una serie de presiones emergentes.

La política social prevaleciente en gran parte de los países de América Latina adolece de grandes escollos en la atención universal de la población, limitada además por la gran heterogeneidad social y cultural en los países y, sobre todo, por la subsistencia de determinadas prácticas de clientela política que en los contextos de mayor atrasos desvirtúan y dificultan aún más la operatividad y el logro de objetivos de los programas sociales.

Bibliografía

Baijraj, R. J., M. Villa y J. Rodríguez (2002) *Población y desarrollo en América Latina y el Caribe: un desafío para las políticas públicas,* Serie Población y Desarrollo, CELADE, Santiago de Chile.

Brown Grossman, F. (1994) *Estrategia de competitividad, productividad, recursos humanos y empleo en los 90's*, México, DF.

Castillo Fernández, D. y J. Martínez Pizzarro (2009a) "Migrações". En: E. Sader *et al.* (coords.) *Latinoamericana*, Enciclopedia Contemporánea de América Latina y el Caribe, Laboratorio de Políticas Públicas y Boitempo Editorial, Río de Janeiro.

Castillo Fernández, D. (2009b) *Los nuevos trabajadores precarios,* Miguel Ángel Porrúa, México, DF.

CELADE (2004) "América Latina y el Caribe. Estimaciones y proyecciones de población 1950-2050". En: *Boletín Demográfico*, no. 73, LC/G.2225, Santiago de Chile.

CEPAL (2001) *La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades,* Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, CEPAL y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Río de Janeiro, 23-24 de octubre.

CEPAL (2004) "América Latina y el Caribe: estimaciones y proyecciones de población, 1950-2050". En: *Boletín Demográfico,* a. XXXVII, no. 73, Santiago de Chile.

CEPAL (2006) *Panorama social de América Latina 2006,* CEPAL, Santiago de Chile.

CEPAL (2009[a]) "Base de datos macroeconómicos, 2008-2009", División de Desarrollo Económico, Santiago de Chile.

CEPAL (2009b) *Panorama social de América Latina*, CEPAL, Santiago de Chile.

CEPAL (2009c) *Estadísticas e indicadores sociales*, CEPAL, Santiago de Chile.

CEPAL (2010) *Objetivos de desarrollo del milenio y compromisos de El Cairo,* disponible en: http://eju.tv/2010/07/cepal-objetivos-de-desarrollo-del-milenio-y-compromisos-de-el-cairo/#ixzz0vNwZBRK5

Cimoli, M. *et al.* (2006) "Un modelo de bajo crecimiento: la informalidad como restricción estructural". En: *Revista de la CEPAL*, no. 88, abril, Santiago de Chile.

CONAPO (2000) *El perfil sociodemográfico de los hogares en México 1976-1997*, México, DF.

Chackiel, J. (2004) *La dinámica demográfica en América Latina*, Serie Población y desarrollo, no. 52, CEPAL, Santiago de Chile.

Ehrke, M. (1991) "El perdedor de la economía mundial. América Latina en el mundo de suma cero". En: *Revista Nueva Sociedad*, no. 115, septiembre-octubre, Caracas.

Faroog, Ghazi M. y Y. Ofosu (1993) *Población, fuerza de trabajo y empleo: conceptos, tendencias y aspectos de políticas*, OIT, Programa Mundial de Empleo, Ginebra.

OIT (2006) *Panorama laboral 2006*, Lima.

Stallings, B. y J. Weller (2001) "El empleo en América Latina bases fundamentales de a política social". En: *Revista de la CEPAL*, no. 75, diciembre, Santiago de Chile.

Viveros, A. (2001) *Envejecimiento y vejez en América Latina y el Caribe: políticas públicas y las acciones de la sociedad*, Serie Población y Desarrollo, no. 22, CELADE, Santiago de Chile.

Weller, J. (1998) *Los mercados laborales en América Latina: su evolución en el largo plazo y sus tendencias recientes*, CEPAL, Santiago de Chile.